



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DIECIOCHO (18) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá D. C., veinticuatro de febrero de dos mil veintidós

Radicación No. 11001400301820190039100

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Corresponde al Despacho efectuar la evaluación de la investigación disciplinaria en este proceso adelantado contra **SHARON CATHERINE PÉREZ ALARCÓN**, encontrándose dentro del término legalmente previsto de conformidad con lo normado en el artículo 160-A y siguientes de la Ley 734 de 2.002.

II. SITUACIÓN FÁCTICA

Se dispuso investigar disciplinariamente a la precitada **SHARON CATHERINE PÉREZ ALARCÓN** en su condición de ex empleada de éste despacho judicial quien ostentaba el cargo de Escribiente en Provisionalidad, con ocasión de los hechos, actos y omisiones que rodearon el extravío de la documentación sometida a reparto el 5 de marzo de la misma anualidad, bajo la secuencia No. 17843 de CHEVYPLAN S.A. contra David Toro. Dicha providencia fue notificada personalmente a la investigada el 22 del mismo mes.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

Acreditación de la condición de disciplinable y apertura del proceso

Una vez abierta la investigación disciplinaria de la referencia en auto del 21 de marzo de 2019, se procedió a acopiar al plenario la Resolución No. 005 del 13 de junio de 2016 por la cual se efectuó el nombramiento de la investigada; el acta de posesión de la misma data; la certificación laboral de la entonces empleada de fecha 28 de marzo de 2019 emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá–Cundinamarca; el certificado de antecedentes de la Procuraduría de la misma fecha en el que consta que no registra sanciones ni inhabilidades, ni es responsable fiscalmente; y la constancia de la compulsión de copias a la Fiscalía General de la Nación comunicada mediante oficio No. 0821.

Versión libre de la investigada

Mediante auto del 4 de abril de 2019 se fijó como fecha para llevar a cabo la recepción de la versión libre el 8 de mayo siguiente. En la misma data, se dispuso sanear el proceso haciendo expresa alusión a que el mismo se regularía por lo normado en la Ley 734 de 2002 como norma aplicable y no a

lo previsto en la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) al no haber entrado en vigencia para esa data, resaltándose que frente a este pronunciamiento la investigada no se manifestó en sentido alguno.

Llegada la fecha, la investigada **SHARON CATHERINE PÉREZ ALARCÓN** acudió en compañía de apoderado de confianza a quien se le reconoció personería, y adujo en su versión libre básicamente que el día 5 de marzo de 2019 sobre las 11:20 a.m. procedió a recoger el reparto asignado al Despacho siendo esa una función exclusiva suya, verificó que de los procesos que le fueron entregados por el señor David (sin precisar el nombre completo) quien era el que hacía el reparto le faltaba uno, por lo que procedió a manifestar dicha situación a aquel, quien le indicó que una vez apareciera se lo harían llegar al juzgado o como solían hacerlo lo entregarían con el reparto siguiente, motivo por el cual ella procedió a firmar el acta de entrega de conformidad sin dejar anotación alguna sobre el particular.

Añadió que al día siguiente asistió al Despacho quien dijo ser dependiente de CHEVYPLAN S.A. preguntando por el número del radicado de la demanda en la que era parte actora, por lo que le indicó que aún no le habían entregado el proceso y le manifestó la situación al entonces Secretario del Juzgado Luis David, quien le indicó estuviera pendiente de dicha situación.

A partir de ese momento, adujo que fue todos los días a preguntar por el proceso indicándosele en principio que había sido ubicado y enviado con otro empleado de otro despacho, pero luego le aclaró el encargado que no se trataba de su caso y que como ella había firmado de conformidad el recibido que era su responsabilidad, por lo que le comentó ello al entonces secretario. Preciso que otro encargado de reparto (Sr. Fidel) le dijo al secretario quien bajó a averiguar por el proceso que le diera 3 días a ver si el caso aparecía, resaltando que ella dejó la anotación en la copia del recibido del reparto sobre el proceso faltante pero después de que fue a preguntar por el caso el dependiente precitado.

Luego, precisó que esa situación de faltantes de procesos es común y que con antelación se había presentado, por lo que en ella en esas ocasiones había dejado la anotación de los ausentes en el comprobante de recibido, lo cual se podía comprobar en las copias de las actas del Despacho. Incluso, añadió que después de esa fecha se presentó lo mismo con otro caso dejando ella la anotación pertinente, precisando que no hizo lo mismo con el caso faltante que motivó este disciplinario pues en varias ocasiones solo al manifestarle el encargado de reparto es suficiente y ellos indican que estarán pendientes y que no es necesario dejar anotaciones.

Declaración de Luis David Ortiz Arias

El 12 de junio del mismo año, se recibió la declaración del señor Luis David Ortiz Arias en su condición de ex secretario de este Despacho judicial. En el mismo adujo en síntesis que hasta el 8 de marzo de 2019 advirtieron la falta del expediente cuando acudió el dependiente de CHEVYPLAN S.A. preguntando por el número del radicado de la demanda en la que era parte actora, y tras revisar el acta de reparto del 6 de marzo anterior evidenciaron el faltante bajo la secuencia No. 17843, evidenciando de su parte que cuando

verificó el acta de recibido no obraba anotación alguna de proceso faltante por parte de la disciplinable **PÉREZ ALARCÓN**.

Documentales

- Se allegó respuesta el 13 de diciembre de 2019 por la cual el Coordinador de Reparto del Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia, indicó que el entonces encargado del reparto ya no estaba vinculado laboralmente, pues su cargo era en provisionalidad y posteriormente llegó el empelado de carrera en propiedad en virtud de la Convocatoria No. 2 de 2010 por lo que no le constaban los hechos.
- Así mismo, la secretaría del Juzgado, adoso al plenario una certificación en la que indica que en esta sede judicial no cursa proceso con acta de reparto No. 17843 de CHEVYPLAN S.A. contra DAVID TORO, ya que la demanda correspondiente a esa secuencia fue extraviada, la cual tampoco fue objeto de reconstrucción en este juzgado.
- Que no obstante lo anterior, encontró en el sistema Siglo XXI, que en el juzgado curso proceso ejecutivo de menor cuantía con radicación 2020-00250, de CHEVYPLAN S.A. contra DAVID TORO MORENO y DANIELA IDAGARRA DÍAZ, el cual actualmente se encuentra archivado, ya que fue terminado por pago, mediante auto del 15 de octubre de 2.020.
- Por su parte, la Coordinadora de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca, aportó certificación en la cual informa que según búsqueda del aplicativo EFINOMINA, se encontró un servidor judicial llamado JOSÉ FIDEL CACERES BOLAÑOS, plasmando en la misma, los datos de contacto del citado servidor y el certificado de tiempo de servicios.
- De igual forma, el Coordinador del Centro de Servicios para Juzgados Civiles, Laborales y de Familia, aclaró la mayoría del personal que actualmente labora en la dependencia de reparto, fue nombrado en carrera a partir del año 2.019, posterior a la fecha de los hechos que originaron el presente trámite.
- El Coordinador de Tecnología, informó que una vez revisadas las cámaras de seguridad, se estableció que la capacidad de los discos duros solo presentan registros de almacenamiento de quince (15) días calendario, por lo que los registros del año 2.019, ya no se encuentran.

Finalmente, en auto del 03 de febrero de 2.022 se ordenó el cierre de la investigación disciplinaria, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 160-A y siguientes de la Ley 734 de 2.002, se procede a efectuar la evaluación de la investigación disciplinaria previas las siguientes:

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El suscrito titular del Juzgado 18 Civil Municipal de Bogotá, resulta competente en esta instancia para conocer de la presunta falta disciplinaria, en que se vean involucrados los servidores del precitado Despacho Judicial.

Al respecto el artículo 2 de la Ley 734 de 2002 dispone: “**TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.** Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, **corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.**”

A su vez el parágrafo 3 del artículo 76 de la misma norma prevé: “**CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. Parágrafo 3.** Donde no se hayan implementado oficinas de control interno disciplinario, el competente será el superior inmediato del investigado y la segunda instancia corresponderá al superior jerárquico de aquél.”

Aunado a lo anterior, en auto de esta misma data se ordena REASUMIR EL CONOCIMIENTO de esta investigación, en atención a lo ordenado en auto adiado 31 de mayo de 2021 emanado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá dentro del proceso de la referencia, a donde se había remitido el proceso desde el 4 de marzo anterior.

2. Procedencia y oportunidad del pliego de cargos

Conforme a lo previsto en el Capítulo III de la Ley 734 de 2.002 corresponde la evaluación de la investigación disciplinaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 161 y siguientes ibídem, encontrándose el Despacho dentro del término contemplado en el artículo 160-A ibídem.

3. Caso concreto

De los medios de prueba aportados, confrontando la versión libre de la ex empleada investigada y el objeto de controversia analizado en este asunto, se aprecia en primer lugar, que en efecto la señorita **SHARON CATHERINE PÉREZ ALARCÓN** fungió como Escribiente en Provisionalidad de este despacho judicial, siendo nombrada mediante Resolución número 005 del 13 de junio de 2016 y posesionándose en el cargo en la misma fecha según el acta obrante en el plenario. Igualmente, se acreditó que para el 28 de marzo de 2019 aun fungía en el cargo referido en este juzgado civil, y que la misma no contaba hasta esa data con antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación.

En tanto, el motivo de la investigación en su contra se centra en que para el día 5 de marzo de 2019, aproximadamente sobre las 11:30 de la mañana, la disciplinable se desplazó a la ventanilla de reparto de este edificio judicial ubicada en el primer piso y allí, como era habitual dentro de sus funciones, procedió a recibir el reparto correspondiente a las demandas

nuevas asignadas a este juzgado. No obstante, se estableció que el proceso identificado con la secuencia número 17843 en el que fungía como demandante Chevyplan S.A. en contra de Edwin Olaya Melo se extravió, en tanto no se halló a las instalaciones de este juzgado civil municipal.

Así las cosas, las explicaciones iniciales de la disciplinable **PÉREZ ALARCÓN** rendidas el día 11 de marzo del mismo año, se centraron en qué el día de los hechos revisó detalladamente los procesos recibidos por ella en la oficina de reparto, y advirtió la falta del proceso identificado con la secuencia ya señalada, por lo que me informó de inmediato al empleado llamado “David” quien según ella era el encargado de la ventanilla de reparto para esa fecha, añadiendo que el mismo le dijo tendría en cuenta dicho caso faltante para cuando apareciera entregárselo a ella y completar el reparto, siendo habitual esa situación.

Expuso que al día siguiente del reparto se acercó a la baranda del juzgado un dependiente judicial para preguntar por el proceso en mención, aduciendo ser autorizado de la parte demandante, por lo que ella advirtió que aún no había sido entregado el proceso y, tras comentarle al entonces secretario la situación, señor Luis David Ortiz Arias, fue nuevamente a la oficina de reparto donde el mismo individuo de nombre “David” le informó que lo había encontrado y enviado con otra persona de algún juzgado ubicado en el mismo piso de este despacho judicial, y que en cuanto ubicara a la persona con quien le había enviado el proceso le pediría que se lo entregara.

Precisó además en esa explicación inicial, que transcurridos dos días desde ese segundo encuentro, el entonces secretario de este juzgado, se dirigió a las oficinas de reparto siendo atendido nuevamente por el señor David, quien en este tercer encuentro le confirmó que no había aparecido el proceso echado de menos y, que como la disciplinable ya había firmado el acta de recibido, era su responsabilidad más no la de la oficina precitada.

Nótese, que en esta primera declaración obrante a folios 3 del plenario la ex empleada **SHARON CATHERINE PÉREZ ALARCÓN** adujo que dejó la salvedad de la falta de ese proceso en el acta de recibido de los procesos, y que los encargados del reparto supuestamente le informaron a ella, que dicha situación de quedar pendiente algún proceso al momento de reparto pasaba muy a menudo “*casi todos los días*”, indicándole que lo más seguro es que la demanda extraviada estuviera en el despacho lo que nunca ocurrió, concluyendo que los encargados del reparto querían evadir su responsabilidad.

Posteriormente, tras oficiarse el 11 de marzo siguiente a la Dirección Seccional de Administración Judicial solicitando la entrega inmediata del expediente perdido, identificado con la secuencia de reparto 17843, así como las explicaciones relacionadas con la demora o falta de entrega del caso, incluyendo la individualización de los servidores judiciales responsables de tal omisión; se allegó respuesta al día siguiente por la Coordinadora del Centro de Servicios, quien indicó que tras revisar junto con los empleados que hacen parte de la entrega de los procesos, ubicó las planillas originales de entrega de los procesos del día 5 de marzo de 2019 correspondientes a este despacho Judicial, y evidenció que en la misma no existe ningún tipo de anotación u observación por parte de la empleada que recibió el reparto, esto es la

encartada **PÉREZ ALARCÓN**, sino que por el contrario cada una de las siete (7) demandas allí relacionadas fueron punteadas o “chuleadas”, siendo recibidas a satisfacción por la disciplinable quién firmó el recibido respectivo.

En tanto, adjunto a su respuesta obra en efecto la copia del acta de reparto de fecha 5 de marzo de 2019, en la cual se aprecia que se asignaron 7 procesos en dicha fecha al Juzgado 18 Civil Municipal de Bogotá, apareciendo cada uno de ellos con un visto bueno en señal de recibido “punteados o chuleados”, incluyendo el proceso objeto de pérdida ubicado a renglón sexto de dicha acta, y sin que se aprecie anotación alguna de ausencia de algún expediente. Dicha acta obra suscrita por la acá investigada a manuscrito como “Sharon Pérez” quién además plasmó de su puño y letra el día y la hora dejando totalmente vacío la parte de OBSERVACIONES, y quedando vigente y sin macula, la anotación qué obra de que “Se deja constancia que el JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL recibió los 7 proceso(s) relacionado(s) anteriormente”.

Está probado también, que tras los intentos infructuosos del titular de este despacho por ubicar con todo el personal de Secretaría la demanda identificada con la secuencia referida; obra constancia del entonces secretario Luis David Ortiz Arias adiada 21 de marzo 2019, en la cual dejaba constancia que aportaba la copia del comprobante de recibido del reparto de la fecha 5 de marzo correspondiente a este juzgado, advirtiendo que en la misma aparecen los siete (7) procesos para ser entregados en dicha fecha y sin que sobre ninguna constancia o anotación de pendiente respecto del proceso identificado con la secuencia 17843 objeto de esta investigación.

Incluso, dicho ex secretario dejó la salvedad que la anotación que obra sobre dicha copia del acta de recibido con la palabra “*Pendiente*”, fue impuesta por la disciplinable **SHARON CATHERINE PÉREZ ALARCÓN** el 6 de marzo de 2019, esto es al día siguiente de haber recibido el reparto cuyo proceso se extravió y, solo una vez verificó que el expediente echado de menos no se encontraba en las demandas recibidas el día anterior, obrando dicho informe a folio 22 del plenario.

Luego, tras la versión libre rendida el día 8 de mayo 2019 por la investigada en la que por demás estuvo acompañada de apoderado judicial de confianza, y cuyos apartes ya se resumieron en esta providencia, así como también la declaración del ex secretario precitado Luis David Ortiz Arias; milita que oficiosamente se envió comunicaciones a la Coordinadora del Centro de Servicios el 20 de mayo y 23 de septiembre de 2019, a efectos que informara individualmente a las personas que atendían la oficina de reparto para los juzgados civiles y que estudien trabajando para la fecha los hechos, esto es el 5 de marzo del mismo año.

En respuesta, se indicó el 13 de diciembre 2019, que la persona que se encontraba laborando para la fecha 5 de marzo de esa anualidad en el cargo de reparto, ya se encontraba desvinculada de la Dirección Ejecutiva Seccional de Bogotá pues ocupaba un cargo en provisionalidad y, con ocasión de la Convocatoria No 2 de 2010, nombraron y posesionaron a quien obtuvo el cargo en propiedad, por lo que se había dado un cambio en el personal que se encontraba laborando en este momento, resultando imposible obtener el testimonio frente a los hechos acaecidos en la fecha solicitada.

Se sigue de lo anterior, que la investigada **PÉREZ ALARCÓN** obrando como servidora pública en su condición de ex empleada de este despacho en el cargo de Escribiente en Provisionalidad, incumplió en primer lugar con su deber legal de **cumplir con los deberes** contenidos en la constitución, la normatividad, el manual de funciones de su cargo y las órdenes superiores emitidas por el titular del despacho (Art. 34 Numeral 1º Ley 734 de 2.002) toda vez que en su función de retirar el reparto de los procesos asignados a este despacho el pasado 5 de marzo de 2019, no fue lo suficientemente diligente para advertir la ausencia del proceso identificado con la secuencia de reparto 1784 tantas veces aludido, y proceder en ese evento como lo dicta las directrices y experiencia propias de sus repetitivas funciones, dejando la expresa salvedad en la copia del acta de entrega de procesos de la Oficina de Reparto que indicara sin lugar a dudas, que no había recibido el caso extraviado.

Igualmente, con este proceder pudo vulnerar también el deber de **cumplir con diligencia** el servicio que le fuere encomendado (Art. 34 Numeral 2 Ley 734 de 2.002), en este caso el recibo efectivo de los procesos allegados por reparto el 5 de marzo de 2019, teniendo que abstenerse de cometer dicha omisión que a la postre significó la perturbación injustificada del servicio esencial de administración de justicia para la parte demandante esto es Chevyplan S.A., quien vio cómo su demanda presentada en contra de Edwin Olaya Melo se extravió con soportes originales, causándole sin duda un perjuicio que a la fecha no se ha logrado remediar en tanto la demanda y sus anexos jamás apareció.

En el mismo sentido, se pudo vulnerar el deber de **custodiar y cuidar la documentación** e información que por razón de su entonces empleo como Escribiente en Provisionalidad de este despacho, debiendo mantener bajo su cuidado estricto los procesos recibidos el 5 de marzo de 2019 por reparto de la oficina correspondiente, y en caso de faltar alguno dejar la salvedad expresa en el acta de entrega en el mismo instante y no al día siguiente y en la copia del despacho lo cual ya resultaba inane, pues era ella quien tenía acceso directo a la demanda extraviada o en caso de no habersele entregado a la copia del acta de la oficina de reparto, la cual suscribió de conformidad sin dejar anotación de ningún faltante, pudiendo evitar con esa simple previsión la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de dicha demanda (Art. 34 Numeral 5 Ley 734 de 2.002).

Derivada de la vulneración de los deberes precitados, se colige que la disciplinable pudo incurrir en la falta consistente en **incumplir los deberes** contenidos en la Constitución, los reglamentos y los manuales de funciones, pues está claro que la función de recibir cotidianamente el reparto, es algo casi exclusivo del cargo de Escribiente en Provisionalidad que ostentaba para la fecha de los hechos, tal y como lo reconoció la investigada en su versión libre, estando contenida dicha prohibición en el Artículo 35 Numeral 1º de Ley 734 de 2.002.

Aunado a lo anterior, también se predica la anterior falta en concurso con la dispuesta en el Artículo 35 Numeral 13 ibídem, consistente en ocasionar daño o en este caso puntual, **dar lugar a la pérdida de** bienes, elementos, **expedientes** o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones, pues está probado con el acta de recibido aportado por la

Coordinadora del Centro de Servicios el pasado 11 de marzo de 2019, que la disciplinable **SHARON CATHERINE PÉREZ ALARCÓN**, acudió a la entrega de los procesos correspondientes a este despacho Judicial el día 5 de marzo de 2019, y aun cuando según su dicho no recibió el proceso identificado con la secuencia de reparto 1784; lo cierto es que no plasmó ningún tipo de anotación u observación sino que por el contrario cada una de las siete (7) demandas allí relacionadas fueron punteadas o “chuleadas”, siendo recibidas a satisfacción por la acá encartada quién firmó el recibido respectivo presumiéndose como cierto que todo el contenido de dicha acta de entrega le fue dado a la referida ex empleada.

Aunado a lo anterior, en informe rendido por el entonces secretario de este Despacho el , adujo claramente que si bien obra una anotación en la copia del acta de recibido del 5 de marzo de 2019 que le corresponde al juzgado, al plasmarse la palabra "Pendiente", la misma fue impuesta por la disciplinable **SHARON CATHERINE PÉREZ ALARCÓN** solo hasta el 6 de marzo de 2019, esto es al día siguiente de haber recibido el reparto, y solo una vez verificó que el expediente echado de menos no se encontraba en las demandas recibidas el día anterior, de lo que se colige que advirtió hasta ese momento el caso extraviado y procedió en dicha data, a dejar la salvedad.

Lo anterior como ya se indicó, fue avalado por la encartada en su versión libre, y corroborado por el precitado ex secretario en la declaración que rindió en este asunto el pasado 12 de junio de 2019, al aducir que cuando verificó el acta de recibido no obraba anotación alguna de proceso faltante por parte de la disciplinable **PÉREZ ALARCÓN**.

Por ello, observa el Despacho que no existe hasta el momento ninguna causal de justificación para el proceder omisivo y grave de la investigada, vulnerando los deberes aludidos en la gestión encomendada de recibir el reparto en la fecha de los hechos, por lo cual existe mérito suficiente para realizar la calificación provisional de la conducta con pliego de cargos como sigue a continuación.

4. Adecuación típica

De acuerdo al material probatorio acopiado y teniendo en cuenta que los hechos objeto de investigación ocurrieron bajo la vigencia de la Ley 734 de 2.002, surge mérito para formular pliego de cargos en contra de la ex empleada de este Juzgado 18 Civil Municipal de Bogotá, señorita **SHARON CATHERINE PÉREZ ALARCÓN** identificada con C.C. 53.060.860 de Bogotá en el cargo de Escribiente en Provisionalidad, pues al parecer vulneró los deberes contenidos en los **numerales 1º, 2 y 5 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002**, los cuales disponen que son deberes de todo servidor público: **1. “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”, 2. “Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la**

suspensión o **perturbación injustificada de un servicio esencial**, o que implique abuso indebido del cargo o función” y 5. **“Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos”**.

Por ello, pudo incurrir la investigada en las faltas disciplinarias o prohibiciones consagradas en el **artículo 35 numerales 1º y 13 de la Ley precitada**, según las cuales a todo servidor público le está prohibido: 1. **“Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo” en concurso homogéneo** con la prevista en el numeral 13. **“Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones”** resaltándose en negrita los verbos retores vulnerados y las características normativas aplicables a este caso, calificación que se hace provisionalmente mientras se continúa la presente investigación para lograr el completo esclarecimiento de los hechos.

5. Modalidad de la conducta y forma de culpabilidad

Igualmente, queda claro que siendo para el momento de ocurrencia de la presunta falta una empleada judicial debidamente nombrada y posesionada, conoce de las previsiones y tareas que son propias de sus funciones, así como de los deberes contenidos en la Ley, por lo que atendiendo a la naturaleza de la falta que se le endilga, se deduce que su conducta se realizó a título de **culpa grave** atendiendo a los criterios previstos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2.002 **y por omisión** como se evidenció en la adecuación de las conductas endilgadas y, por ello deberá responder en este asunto.

6. Control de legalidad

En este estado de la diligencia se procede a realizar la legalización de la actuación la cual no adolece de vicios de forma ni de fondo, por cuanto se dio apertura de investigación disciplinaria en auto del 21 de marzo de 2019, y tras acreditarse la calidad de la disciplinable, en auto del 4 de abril de 2019 se efectuó un control de legalidad previo el cual no fue reparado por los intervinientes.

Luego, el 8 de mayo de 2019 se recibió la versión libre de la investigada en la que estuvo asistida por apoderado de confianza, y tras evacuarse las pruebas ordenadas en este asunto previa declaratoria de nulidad desde el auto de fecha 27 de noviembre de 2020 (por el cual se había proferido pliego de cargos), se procedió a ordenar el cierre de la investigación en auto del 03 de febrero de 2.022 procediéndose en esta providencia a evaluar la investigación disciplinaria de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Dieciocho (18) Civil Municipal de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

V. RESUELVE:

5.1 FORMULAR PLIEGO DE CARGOS en contra de la investigada **SHARON CATHERINE PÉREZ ALARCÓN** identificado con C.C. No. 53.060.860 de Bogotá quien fungió el cargo de Escribiente en Provisionalidad de esta Sede Judicial, conforme a las consideraciones precedentes expuestas, por presunta infracción al **artículo 35 numerales 1º y 13 de Ley 734 de 2002**, conductas calificadas a título de **culpa grave por omisión**, por faltar a los deberes contenidos en los **numerales 1º, 2 y 5 del artículo 34 ibídem** resaltándose en el acápite de adecuación típica en negrita los verbos rectores vulnerados y las características normativas relevantes para esta investigación.

5.2 Notifíquese personalmente a la investigada de conformidad con lo previsto en los artículos 101, 102, 103 y 165 de la Ley 734 de 2002.

Se le advertirá que contra esta decisión no procede recurso alguno de conformidad con lo normado en el artículo 162 de la Ley 734 de 2.002 y que dispone de un término de diez (10) días contados a partir de la correspondiente notificación para presentar descargos, solicitar y aportar pruebas, si lo estima conveniente según lo normado en el artículo 166 ibídem.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FÉLIX ALBERTO RODRÍGUEZ PARGA
JUEZ

KMM

Firmado Por:

Felix Alberto Rodriguez Parga
Juez
Juzgado Municipal
Civil 018
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cca642232f19c571b99c8eb647201c5e8c9276fdde2357a5564d3d9b222661d6**

Documento generado en 24/02/2022 01:29:10 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>